

PERIODO 121°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

16^a REUNION – 10^a SESION ORDINARIA

6 DE AGOSTO DE 2003

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado DANIEL O. SCIOLI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero JOSE L. GIOJA,
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BAR, Graciela Y.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CONTI, Diana
 CURRETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, José L.
 GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 HALAK, Beatriz S.
 IBARRA, Vilma L.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MAESTRO, Carlos
 MARTÍ, Rubén A.
 MARTÍN, Floriania N.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MONTOYA, Jorge L.
 MORALES, Gerardo R.

MORO, Eduardo A.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PARDO, Angel F.
 PASSO, Juan C.
 PAZ, Elba A.
 PICHETTO, Miguel A.
 PRADES, Carlos A.
 PUERTA, Federico R.
 RASO, Marta E.
 SALVATORI, Pedro
 SAPAG, Luz M.
 SEGÚI, Malvina M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 USANDIZAGA, Horacio D.
 WALTER, Pablo H.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALÍA, José L.

AUSENTE POR ENFERMEDAD:

CHIAPPE, Lázaro A.

AUSENTES CON AVISO:

ALPEROVICH, José J.
 ARANCIO de BELLER, Lyliá M.
 BARRIONUEVO, José L.
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 COLAZO, Mario J.
 ISIDORI, Amanda M.
 MAYANS, Miguel A.
 MERA, Mario R.
 PARDAL, Jorge A.
 PERCEVAL, María C.
 VERNA, Carlos Alberto

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 4207.)
2. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 4207.)
3. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo. (Pág. 4207.)
4. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Martí por el que se rinde homenaje a la Gendarmería Nacional por el 65º aniversario de su creación (S.-1.611/03). Se aprueba. (Pág. 4207.)
5. Lectura y aprobación del plan de labor. (Página 4211.)
6. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay a don Hernán Patiño Mayer (P.E.-318/03). Se aprueba. (Pág. 4212.)
7. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar director del Banco Central de la República Argentina, para completar el período de ley del cargo vacante en los términos de los artículos 7 y 13 de la Carta Orgánica del Banco Central, al licenciado don Alfredo Arturo O'Connell (P.E.-200/03). Se aprueba. (Pág. 4213.)
8. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para

49. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre la Realización de Actividades Relacionadas con las Instalaciones de Vigilancia Internacional**, suscrito en Viena, Austria, el 9 de diciembre de 1999 (P.E.-802/02). Se aprueba. (Pág. 4309.)
50. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia y Chile**, suscrito en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002 (P.E.-621/02). Se aprueba. (Página 4316.)
51. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Parte del Mercosur**, suscrito en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002 (P.E.-555/02). Se aprueba. (Pág. 4322.)
52. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Parte del Mercosur**, suscrito en Florianópolis, el 15 de diciembre de 2000 (P.E.-268/01). Se aprueba. (Pág. 4323.)
53. **Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el XI Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N° 36 celebrado entre los gobiernos de los Estados parte del Mercosur y el de Bolivia**, y su anexo suscrito en Montevideo, el 19 de junio de 2001 (P.E.- 7/02). Se aprueba. (Pág. 4328.)
54. **Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con la República Democrática Popular de Laos**, suscrito en Bangkok, Reino de Tailandia, el 11 de diciembre de 2002 (P.E.-109/03). Se aprueba. (Pág. 4334.)
55. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere un inmueble a la Universidad de Lanús, provincia de Buenos Aires** (C.D.-163/02). Se aprueba. (Pág. 4337.)
56. **Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con el gobierno de la República de Armenia**, suscrito en Buenos Aires, el 3 de mayo de 1994 (P.E.-800/02). Se aprueba. (Página 4338.)
57. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley de la señora senadora Halak y del señor senador Maqueda por el que se agravan las penas de conductas delictivas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad** (S.-2.385/02). Se aprueba. (Pág. 4340.)
58. **Renuncia de la señora senadora Halak** (S.-1.659/03). Se aprueba. (Pág. 4354.)
59. **Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley por el que se agrava la escala penal para quienes delinquen con intervención de menores de 18 años** (C.D.-57/01). Se aprueba. (Pág. 4356.)
60. **Consideración del dictamen de las comisiones de Comercio, de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión sobre modificaciones a la ley 22.802, de lealtad comercial** (C.D.-57/01). Se aprueba. (Pág. 4361.)
61. **Consideración del dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del señor senador Falcó sobre protección del espacio aéreo en parques nacionales** (S.-2.386/02). Se aprueba. (Pág. 4362.)
62. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se asigna el nombre de Doctor René Favaloro a un tramo de la ruta 35** (C.D.-44/01). Se aprueba. (Página 4363.)
63. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en**

creando la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (S.-1.641/03). (Pág. 4589.)

CXXXII. Proyecto de declaración del señor senador **Salvatori declarando de interés parlamentario la realización del XXII Congreso Nacional de Cardiología**, a desarrollarse el 16 de agosto de 2003, en **Buenos Aires** (S.-1.661/03). (Pág. 4593.)

84. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4595.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 30 del miércoles 6 de agosto de 2003:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Capitanich. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: estamos aguardando la presencia del resto de los senadores desde las 15 y 30; son las 16 y 30. Sería conveniente establecer algún plazo para evaluar si efectivamente vamos a tener sesión o no. Me parece razonable que por Secretaría se pueda convocar a los miembros de este cuerpo a los efectos de iniciar inmediatamente la sesión.

Sr. Presidente. — Hay cincuenta señores senadores en la casa; por lo tanto, vamos a convocar a los asistentes de los bloques a efectos de que los senadores bajen rápidamente al recinto.

Sr. Capitanich. — Gracias, señor presidente.

—Se continúa llamando.

—A las 16 y 48:

Sr. Presidente. — Le pido a los señores senadores que vayan ocupando sus bancas porque en diez minutos vamos a pasar lista.

Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: me voy a retirar del recinto porque considero que es una falta de respeto: desde las 15 y 30 estoy esperando junto con otros señores senadores; no puede ser que cuando se determina un horario de sesión se incumpla sistemáticamente con

el reglamento y le falten el respeto a los senadores presentes. Por lo tanto, en este momento me voy, porque creo se ha cometido una falta de respeto por parte del cuerpo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Señor presidente: comprendo la posición del senador por el Chaco, sin ninguna duda que algo de razón tiene. Yo propondría que esperemos diez minutos y pasemos lista, si no hay número suficiente.

Sr. Presidente. — Es lo que ha dicho la Presidencia, pasaremos lista en diez minutos.

—Se continúa llamando.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Con quórum, queda abierta la sesión.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por el Chaco Eduardo A. Moro a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Moro procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

3

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al mensaje ingresado del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo.

Sr. Secretario (Estrada). — (*Lee:*) “Mensaje número 528/03 por el que se solicita acuerdo para nombrar como embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Horacio Antonio Macedo”.

Sr. Presidente. — Pasa a la Comisión de Acuerdos.

4

HOMENAJE POR EL 65° ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje a

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de mayo del año de 1994, en dos originales, en los idiomas español, armenio e inglés, ambos igualmente auténticos.

Por el gobierno de
República Argentina

Por el gobierno de
República de Armenia

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 30 de abril de 2003.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en Buenos Aires el 3 de mayo de 1994.

El propósito del presente acuerdo es el de promover el desarrollo de la cooperación económica y comercial entre la República Argentina y la República de Armenia, alentando y facilitando los vínculos económicos bilaterales, explotando y desarrollando nuevos mercados, fomentando la transferencia de tecnología, estimulando la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas, promoviendo la cooperación industrial y agrícola, y desarrollando las vías de comunicación.

Las partes se otorgarán mutuamente el trato de nación más favorecida con respecto a los derechos de aduana y otros gravámenes de cualquier clase que impongan a las importaciones o a las exportaciones, como asimismo con relación a las normas y formalidades atinentes al movimiento de productos entre ambos países.

Las partes apoyarán, entre otras acciones, el intercambio de información económica y comercial, la organización de ferias y exposiciones, el desarrollo de contactos entre representantes de empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas y la creación de emprendimientos conjuntos.

Por el presente acuerdo, se establece una Comisión Mixta Argentino-Armenia para la Cooperación Económico-Comercial a fin de supervisar su instrumentación, analizar los temas que surjan de su instrumentación y efectuar recomendaciones a los gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Las partes se comprometen a resolver cualquier controversia que pudiera surgir con respecto a la interpretación o aplicación del presente acuerdo, por la vía diplomática a través de negociaciones directas.

La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación comercial, a la vez que permitirá expandir la

capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

EDUARDO A. DUHALDE.

*Alfredo N. Atanasof. - Carlos F. Ruckauf.
- Roberto Lavagna.*

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

57

AGRAVAMIENTO DE PENAS DE CONDUCTAS DELICTIVAS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Sr. Presidente (Gioja). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley de la señora senadora Halak y del señor senador Maqueda por el que se agravan las penas de conductas delictivas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. (Orden del Día N° 1.562.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores Halak y Maqueda (S.-2.385/02), agravando las penas de conductas delictivas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, y teniendo a la vista el proyecto de ley de los señores senadores Halak y Maqueda (S.-2.691/02), sobre agravamiento de penas para delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del presente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Incorpórase como inciso 9, del artículo 80, título 1, capítulo 1, del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Inciso 9: Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad pública.

Art. 2° – Incorpórase como artículo 163 bis, título 6, capítulo 1, del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 163 bis: En los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad pública.

Art. 3° – Incorpórase como artículo 167 bis, título 6, capítulo 2, del Código Penal de la Nación, el siguiente:

Artículo 167 bis: En los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad pública.

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2002.

*Jorge A. Agúndez. – Angel F. Pardo.
– Eduardo S. Brizuela del Moral. –
Eduardo Menem. – Amanda M. Isidori.*

En disidencia parcial:

Jorge R. Yoma.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La seguridad constituye un derecho elemental de todo ciudadano y es deber fundamental del Estado garantizarla a toda la población.

En cumplimiento de este deber, resulta imperioso el dictado de normas dirigidas a construir un país más seguro, tendientes a proteger la vida, la salud y la integridad de las personas como valores básicos.

El proyecto de ley, tiene como finalidad elevar las penas para los autores de las conductas delictivas descritas en el presente, que abusan de su función o cargo como integrantes de las fuerzas de seguridad pública. Para ello incorporamos un nuevo inciso (como inciso 9) al artículo 80 del Código Penal de la Nación.

Por otro lado, esta iniciativa está dirigida también a castigar con más dureza a los integrantes de las fuerzas de seguridad pública que cometan delitos contra la propiedad (incorporando los artículos 163 bis y 167 bis en el Código Penal), aumentando en un tercio la pena, en razón de su posición de ga-

rante en defensa y resguardo de los bienes de los ciudadanos y la sociedad civil en su conjunto, en su estado de indefensión.

Creemos que estas son medidas necesarias, teniendo en cuenta el alto porcentaje de integrantes de las fuerzas de seguridad procesados y condenados por la comisión de los delitos mencionados.

Según estadísticas recientes, la principal causa de detención de miembros o ex miembros de estas fuerzas de seguridad, es el homicidio; contrariamente a lo que ocurre con los presos comunes, quienes poseen más porcentajes en otro tipo de delitos. En el sistema federal el 20 % del total de los miembros de fuerzas de seguridad detenidos están presos por homicidio y el 18 % por delitos contra la propiedad. En el resto de la población la tendencia es inversa, el 40 % está en la cárcel por robos y hurtos y sólo el 12 % por delitos contra las personas.

Por otro lado, no podemos condenar por la comisión de un mismo hecho, con igual dureza a un ciudadano común que a un integrante de las instituciones de seguridad ya que el mismo, justamente, ocupa ese lugar para evitar la comisión de delitos.

Todos sabemos que en los últimos tiempos han crecido sustancialmente los casos de homicidio. Lamentablemente en varios de ellos han participado miembros de las fuerzas de seguridad.

Resulta totalmente absurdo, que en varias oportunidades, aquellos sobre quien recae la responsabilidad de preservar la seguridad, previniendo o reprimiendo los delitos, intervengan en dichos hechos.

En consecuencia de ello, el fundamento del agravante en las penas que contempla la modificación propuesta, lo constituye el hecho de que el autor del delito invista la calidad de miembros de las fuerzas de seguridad pública.

Ante esta realidad, se hace necesario imponer penas más severas. Es indudable que los cambios que producen la realidad política, económica y social ejercen gran influencia en la evolución que deben seguir las normas jurídicas tendientes a prevenir acciones u omisiones consideradas nocivas para la convivencia. La actualización de las penas es necesaria para una mayor organización de la sociedad en su conjunto.

Endurecer las penas es un reclamo de nuestra sociedad, y de muchos países del mundo, quienes se han replanteado o ya han realizado una modificación de penas para combatir los delitos.

Para que exista una adecuada convivencia social, debemos contar con fuerzas de seguridad creíbles y con miembros cuya conducta sea ejemplificadora para el resto de la población. Creemos que así como se debe rendir homenaje a quienes, perteneciendo a estas reparticiones cumplen con su deber en forma correcta, muchas veces en condiciones adversas y arriesgando su propia vida; por otro lado, deben ser castigados más severamente quienes rea-

lizan conductas totalmente contrarias a aquellas por las cuales fueron puestos en sus funciones.

Por las razones expuestas y las que se expresarán al momento de su tratamiento, solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

*Jorge A. Agúndez. — Amanda M. Isidori.
— Angel F. Pardo.*

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Incorpórase como inciso 9 del artículo 80, capítulo 1, título 1, del Código Penal de la Nación, el siguiente:

9. Abusando de su función, cargo o condición, cuando fuere jefe o agente de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias.

Art. 2º — Incorpórase como segundo párrafo del artículo 170 del capítulo 3, título 6, del Código Penal de la Nación, el siguiente:

La pena se aumentará en un tercio, cuando el que ejecutare el delito fuera jefe o agente de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Beatriz S. Halak. — Juan C. Maqueda.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La seguridad constituye un derecho elemental de todo ciudadano y es deber fundamental del Estado otorgarla a toda la población.

En cumplimiento de este deber, resulta imperioso el dictado de normas dirigidas a construir un país más seguro, tendientes a proteger la vida, la salud y la integridad de las personas como valores básicos.

El presente proyecto de ley, tiene como finalidad elevar las penas para los autores de las conductas delictivas que cometan homicidios abusando de sus funciones o que substrajeran, retuvieron u ocultaren a una persona para sacar rescate, siendo jefes o miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales, o penitenciarias. Para ello incorporamos un nuevo inciso al artículo 80 y un segundo párrafo al artículo 170 del Código Penal de la Nación.

Creemos que ésta es una medida necesaria, teniendo en cuenta el alto porcentaje de integrantes de las fuerzas de seguridad detenidos y condenados por la comisión de los delitos mencionados.

Según estadísticas de publicaciones recientes, la principal causa de detención de miembros o ex miembros de estas fuerzas de seguridad, es el homicidio; contrariamente a lo que ocurre con los presos comunes, quienes poseen más porcentajes en otro tipo de delitos. En el sistema federal el 20 % del total de los miembros de fuerzas de seguridad detenidos están presos por homicidio y el 18 % por delitos contra la propiedad. En el resto de la población la tendencia es inversa, el 40 % está en la cárcel por robos y hurtos y sólo el 12 % por delitos contra las personas.

Por otro lado, no podemos condenar por la comisión de un mismo hecho, con igual dureza a un ciudadano común que a un integrante de las instituciones de seguridad ya que el mismo, justamente, ocupa ese lugar para evitar la comisión de delitos.

Todos sabemos que en los últimos tiempos han crecido sustancialmente los casos de homicidio y de secuestro extorsivo. Lamentablemente en varios de estos casos han participado miembros de la fuerza de seguridad.

Ante esta realidad, se hace necesario imponer penas más severas. Es indudable que los cambios que producen la realidad política, económica y social ejercen gran influencia en la evolución que deben seguir las normas jurídicas tendientes a prevenir acciones u omisiones consideradas nocivas para la convivencia. La actualización de las penas es necesaria para una mayor organización de la sociedad en su conjunto.

Endurecer las penas es un reclamo de nuestra sociedad, y de muchos países del mundo, quienes se han replanteado o ya han realizado una modificación de penas para combatir los delitos.

Para que exista una adecuada convivencia social, debemos contar con fuerzas de seguridad creíbles y con miembros cuya conducta sea ejemplificadora para el resto de la población.

Creemos que se debe rendir homenaje a quienes, perteneciendo a estas reparticiones cumplen con su obligación en forma correcta, con honorabilidad, muchas veces en condiciones adversas y arriesgando su propia vida en cumplimiento del deber. Por todo ello y para preservar la salud de nuestras instituciones, es que consideramos que deben ser castigados más severamente quienes realizan conductas totalmente contrarias a aquellas por las cuales fueron puestos en sus funciones.

Por las razones expuestas y las que se verterán al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Beatriz S. Halak. — Juan C. Maqueda.

Sr. Presidente (Gioja). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Señor presidente: será breve.

El dictamen en consideración pertenece a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que había emitido dictamen sobre el tema el 28 de noviembre del año pasado pero en aquel momento el asunto no pudo ser tratado. Sin embargo, ha sido voluntad mayoritaria tratar este dictamen en esta oportunidad.

Los antecedentes sobre la materia son dos proyectos presentados por la señora senadora Halak y por el señor senador Maqueda, que llevaban los números de expedientes S.-2.385 y 2.691/02. La comisión unificó ambos proyectos los efectos de emitir un solo dictamen.

El proyecto se refiere a un aumento en las penas, no solamente para disuadir sino para equilibrar las penas en el distinto disvalor social que tiene la acción de los delincuentes alcanzados por los procesos penales argentinos.

El artículo 1º de esta iniciativa formula una incorporación en el inciso 9 del artículo 80 –título 1, capítulo 1– en el sentido de que cuando un agente de una fuerza de seguridad, abusando de su función o cargo, cometiera un delito de homicidio, ello será equivalente al inciso 8 del artículo 80 que aprobamos el año pasado, aplicable cuando un delincuente asesinaba a un integrante de las fuerzas de seguridad.

Los artículos 2º y 3º hacen referencia al aumento de las penas. Por su parte, el artículo 2º del proyecto incorpora al Código Penal el artículo 163 bis, que dice que en los casos enunciados en todos los delitos de hurto –en sus distintas categorías– la pena se aumentará en un tercio –en su mínimo y en su máximo– cuando quien ejecutase el delito fuese un miembro integrante de la fuerza de seguridad pública. Con respecto al artículo 3º, se menciona el aumento de la pena cuando se trate de todas las modalidades incluidas en el capítulo del robo.

Los antecedentes de este dictamen se basaban en uno de los proyectos presentados por los senadores nombrados, que había incorporado también en el artículo 2º el aumento de pena cuando el delito provenía de integrantes de la fuerza de seguridad en el caso del artículo 170 sobre secuestro extorsivo.

Como es de conocimiento, semanas atrás la Cámara de Senadores aprobó el proyecto. Por lo tanto, ya en esa época –cuando habíamos

redactado este dictamen– se había incorporado ese punto en el anteproyecto que se elevó al Poder Ejecutivo y que después fue convertido en ley por este Congreso, es decir el aumento de pena relacionado con lo establecido en el artículo 170.

¿Por qué se trata, en definitiva, del aumento de pena en el homicidio, en el robo, en el hurto y en el secuestro extorsivo cuando los delitos son cometidos por fuerzas de seguridad? Esto es así porque son los delitos que más violan los derechos fundamentales de la Constitución Nacional, que son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Los otros delitos que pudiesen cometer los integrantes de las fuerzas de seguridad están regulados por la parte general de la evaluación de la pena que hace el juez de acuerdo al artículo 41 del Código Penal.

Señor presidente: simplemente he querido informar someramente el tema porque la señora senadora Halak –autora del proyecto– es quien va brindar los fundamentos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de la norma.

–Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Halak.

Sra. Halak. – Señor presidente: la seguridad, base fundamental de toda convivencia social, está en crisis. Podemos buscar explicaciones en la situación económica o en razones sociológicas; pero el hecho es que en la actualidad existe una escalada de violencia en toda la Argentina. Esto es ya una realidad.

Y si bien es cierto que el Estado no se ha mostrado indiferente al problema, las medidas habitualmente adoptadas, como el refuerzo policial y la inversión en armamento y equipamientos, han sido insuficientes para frenar el deterioro de la seguridad en nuestro país.

Uno de los principales y más graves síntomas de este deterioro es la cada vez más frecuente participación de personal policial en hechos delictivos. Por ello, es fundamental crear mecanismos legales capaces de inhibir el crecimiento de este fenómeno.

Señor presidente: nos corresponde a nosotros, los legisladores, dictar normas que ayuden a construir un país más seguro, que tiendan a

proteger la vida, la salud, la integridad y la propiedad de todos los ciudadanos. Todos ellos son derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución. Con la convicción de contribuir a lograr esa aspiración presentamos este proyecto de ley, cuyo objetivo es recobrar la confiabilidad en las instituciones de seguridad y, en consecuencia, beneficiar a toda la sociedad.

El presente proyecto crea sanciones más severas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que en ejercicio de sus funciones actúan con una conducta absolutamente contraria a la que deberían ejercer. Sabemos que ese comportamiento está restringido a una pequeña porción de los agentes de seguridad, pero es innegable que crece en la sociedad la sensación de deterioro de toda la fuerza.

De esta manera, la mala conducta de algunos elementos resulta claramente dañina para la gran mayoría de los miembros de dichas instituciones que llevan adelante su tarea de manera acorde con sus funciones, sus deberes, su cargo, con mucho celo profesional e, incluso, en muchos casos, dando su vida en defensa del derecho y del deber que, como agentes de seguridad, asumieron.

Estoy convencida, señor presidente, de que en caso de ser aprobada, esta propuesta constituirá una eficiente herramienta legal para disminuir considerablemente el número de integrantes de las fuerzas de seguridad que en el presente son detenidos y juzgados por la comisión de hechos contrarios a derecho.

Entiendo, entonces, que no podemos castigar con igual rigor por la comisión de un delito, a un ciudadano común que a aquel a quien la sociedad le confirió un poder especial, precisamente para evitar el delito. De allí que esta propuesta contemple concretamente que la intervención de un miembro de las fuerzas de seguridad en alguno de los hechos contemplados en el artículo 79, o en los capítulos 1 y 2, del título 6 del Código Penal de la Nación, es suficiente motivo para alterar la escala penal.

La modificación propuesta, como bien lo expresara el senador Agúndez, miembro informante de la comisión, contempla agravar las penas en el delito de homicidio, incorporando el inciso 9 al artículo 80. Y, por otro lado, incorpora los artículos 163 bis en el capítulo 1 y 167 bis en el capítulo 2, del título 6 del Código Penal de la

Nación como agravantes en los delitos de hurto y robo.

Señor presidente: la Argentina vive una etapa de profundos cambios. Hoy, la sociedad espera de los poderes constituidos una nueva actitud, más ágil y más comprometida con sus reclamos y aspiraciones. El Senado de la Nación ocupa un papel central en ese contexto.

Necesitamos, por un lado, crear mecanismos que ayuden al país a alcanzar un nuevo nivel en términos de justicia social y desarrollo económico. Pero también necesitamos contribuir al perfeccionamiento de nuestras fuerzas de seguridad, cuya mayor o menor credibilidad afecta todas las áreas de la actividad económica social.

Por todas estas razones y teniendo presente la imperiosa necesidad de que nuestra sociedad cuente con instituciones creíbles y confiables, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley que, a mi entender, significará asimismo un claro y merecido homenaje a aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que basan su actuación en los principios de la honestidad y de la honradez.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto no pasó por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, por eso no tuve oportunidad de mirarlo antes. Sólo quiero hacer una observación.

Como se trata de una modificación al Código Penal, en el agravamiento de penas tiene que estar absolutamente claro quién va a ser el sujeto pasivo de esta norma. La categoría de fuerzas de seguridad públicas no existe en nuestro derecho. La ley de seguridad interior 24.059 califica fuerzas policiales a la Policía Federal y policías provinciales; fuerzas de seguridad a la Gendarmería y Prefectura Naval y fuerzas penitenciarias a las fuerzas de los servicios penitenciarios. Esa es la terminología que nosotros usamos el año pasado cuando aprobamos la ley 25.601 que era la que agravaba las penas a los que mataban policías y ahí dijimos: miembros de las fuerzas de seguridad públicas, policiales o penitenciarias. Por eso, para ser coherentes y para que después no se aplique ni a policías ni a miembros del Servicio Penitenciario propongo sustituir fuerzas de seguridad pública por fuer-

zas de seguridad, policiales o del Servicio Penitenciario.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. – Señor presidente: he firmado en disidencia el dictamen de este proyecto y quiero explicar el porqué de la disidencia parcial.

Ante todo debo aclarar que he firmado el dictamen porque acompañé la iniciativa desde el punto de vista de los objetivos que persigue la señora senadora Halak en cuanto a establecer una correlación legislativa. El Congreso sancionó la calificación de los delitos que se cometen cuando son víctimas los miembros de las fuerzas de seguridad. El espíritu de este proyecto es el siguiente: así como se estableció una suerte de reconocimiento o de privilegio –aunque quizás éste no sea el término más adecuado– para aquel miembro de alguna fuerza de seguridad que sea víctima de un delito, del mismo modo se propone un agravamiento en la responsabilidad cuando alguno de esos miembros cometa un delito usando las armas que la ley, la Constitución y la sociedad le ha otorgado. El espíritu del proyecto que propone la señora senadora Halak me parece absolutamente válido y en ese sentido lo he acompañado.

La disidencia parcial en realidad tiene que ver con las sanciones que venimos dando desde hace bastante tiempo en esta Cámara: frente a hechos conmocionantes como el avance de la criminalidad en los delitos, la respuesta más fácil o más simple del Congreso consiste en modificar el Código Penal y agravar las penas, como si los problemas fuesen legislativos y no pasaran por determinar las políticas correctas en materia de criminalidad. Entonces, la respuesta facilista hacia los medios de difusión pero muy poco efectiva hacia la sociedad es la que estamos dando permanentemente, pero que no conduce a una disminución de los delitos o en una mayor protección a la sociedad; al contrario, día a día vemos cómo se agrava la situación de inseguridad en nuestro país, a pesar de que reiteradamente el Congreso viene sancionando agravamiento de penas que coloca en una situación de absoluta incoherencia a todo el sistema penal argentino.

El régimen penal establece un sistema de equilibrios, de premios y castigos, de mínimos y de máximos, de acuerdo a la gravedad de los

delitos. Entonces, una reforma parcial como los cientos de reformas que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo no contribuye a solucionar la crítica situación de inseguridad que vivimos, sino que es la respuesta inmediata frente a algún hecho que salió publicado en primera plana. Esta situación recurrente ha provocado un enorme desequilibrio en el sistema penal. Quiero dar un par de ejemplos para que se advierta cómo con estas reformas y estos agravamientos de penas se está alterando absolutamente el sistema de premios y castigos del Código Penal argentino. Voy a citar un par de casos de delitos menores que tienen sanciones mayores que delitos más graves. Por ejemplo, el artículo 91 del Código Penal, en lo que hace a lesiones llamadas gravísimas –que son aquellas que se dan cuando una persona, como consecuencia de una lesión, queda ciega, paralítica, pierde un miembro, etcétera– prevé una pena de tres a diez años, excarcelable. Ahora bien: en el caso del robo con armas, la pena es de cinco a quince años. Reitero: el autor de un delito que provoca que una persona, por ejemplo, quede ciega como producto de una lesión dolosa recibirá una pena de tres a diez años y es excarcelado. Pero si uno es víctima de un robo con un cuchillo, el autor recibe una pena de cinco a quince años. Lo que acabo de enunciar es un solo ejemplo de los cientos que pueden encontrarse en el Código Penal como prueba de la forma en que se ha alterado absolutamente el sistema de penas de nuestra legislación.

Para el tratamiento del próximo proyecto de ley de agravamiento de penas, que seguramente abordaremos en función de algún delito que aparecerá en los diarios, intentaré realizar un estudio más extenso respecto de cómo ha quedado el sistema penal argentino, el sistema de premios y castigos.

La verdad es que si a algún jurista se le ocurre comenzar a analizar cuál ha sido el criterio del legislador para imponer sanciones en la sociedad argentina, se encontrará con algo quizás incomprensible.

Como he votado el agravamiento de penas cuando la víctima del delito es un miembro de las fuerzas policiales, entiendo que correlativamente debería haber una mayor sanción para el caso de que éstos sean los que cometan los delitos, pero me parece que es el momento de po-

ner el freno. No se puede seguir con sanciones que impliquen modificaciones del sistema punitivo argentino porque un delito tiene un efecto conmocionante en los medios de difusión. No se puede seguir alterando de este modo el sistema penal argentino sin ningún criterio avalado por alguna teoría más o menos razonable.

Definitivamente, pienso que hay que encarar una profunda reforma del Código Penal argentino. Así como en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se ha conformado una comisión que se encargará de las reformas procesales sería importante hacer un trabajo profundo y concienzudo de todas las leyes que establecen sanciones penales, incluso de aquellas que están dispersas en leyes especiales y que no integran el cuerpo del Código Penal de la Nación. Es hora de hacer una profunda revisión del sistema penal y restablecer el equilibrio en el sistema de mínimos y máximos, de premios y castigos; es decir, una reforma que permita tener una mejor política de seguridad mediante la prevención del delito. Así, dejaríamos de decirle a la sociedad algo absolutamente incorrecto: que la solución a los reclamos de seguridad es sancionar una ley que agrave las penas. La verdad es que hasta ahora lo que ha visto la sociedad es que, día a día, crece el índice de delitos a pesar de las sanciones mediáticas del Congreso.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Seguí.

Sra. Seguí. – Señor presidente: es cierto como lo señaló el señor senador Yoma, que imponer penas más graves o realizar modificaciones al Código Penal no garantiza mayor seguridad.

El tema es extenso y pasa por un defecto de relación entre las comunidades y sus policías, un problema de falta de confianza de las comunidades hacia sus policías; un problema de falta de rediseño o reingeniería policial, un cambio de cultura policial. En definitiva, problemas de índole política y de política de seguridad, que no son competencia de este Congreso.

Pero también es cierto que la democracia necesita seguridad. El gobierno del pueblo tiene que dar condiciones mínimas de seguridad para que la democracia se desarrolle. Es decir, no hay democracia sin seguridad, pero tampoco puede haber seguridad sin democracia.

Creo que éste es el punto en el cual el proyecto en cuestión viene, por lo menos, a sentar el concepto de que este Senado considera que los agentes del orden, que los responsables de la seguridad pública, las policías, es decir, aquellos en quienes el estado de derecho ha encomendado el uso de la fuerza, deberán emplearlo con carácter excepcional, lo que, precisamente, es una característica del estado de derecho. Dicha excepcionalidad, que debe ser medida cualitativa y cuantitativamente, debe producir en su uso menos daño que el que se pretende evitar. Esto bien habría válido establecerlo en la historia argentina en otras ocasiones.

Además, con este proyecto, el Senado va a dejar en claro que ese estado de derecho debe sancionar, pero debe hacerlo con mayor severidad, a esos custodios de la comunidad que en uso de ese derecho a ejercer la fuerza, no sólo se exceden sino que cometen delitos.

Creo que el proyecto tiene en ese hilo fundamental un aporte nuevo que se le hace a la democracia. La Argentina quiere que las fuerzas de seguridad y policiales usen la fuerza pero que lo hagan legítimamente. Y que aquellos que se excedan en su uso o que cometan delitos, sean sancionados con mayor severidad.

Los gestos del Estado en materia de seguridad también alientan a elevar los índices de seguridad y a reducir los índices de victimización. De hecho, hay un elevado porcentaje de ciudadanos –creo que un 31 por ciento– encuestados por Zuleta Puceiro últimamente, que considera que mejorar el problema de seguridad en la Argentina reside en corregir la corrupción policial. Entonces, mejorar los índices de victimización y también los de confianza de la comunidad en el Estado y en el estado de derecho, contribuirá en alguna medida a mejorar en el mediano plazo, por lo menos, los índices de seguridad.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: creo que la línea que ha explicitado la señora senadora por Tucumán es correcta. En realidad, acá estamos reequilibrando una legislación.

El más famoso discurso de Pellegrini en la Cámara del Congreso es en ocasión de una ley de amnistía, en la cual Pellegrini, precisamente, se opone a la amnistía fundado en el carácter especial en que la Nación Argentina confiere el

uso de las armas; en aquel caso era a los militares. No en vano el sable de nuestros oficiales dice expresamente: "No lo saques sin razón, no lo envaines sin honor". Es decir que el uso está fundado, efectivamente, en una concesión especialísima.

Pellegrini decía: "A un gesto de esos oficiales en los que la Nación ha confiado, sube o baja el pabellón nacional, se abren o no las puertas de los cuarteles; la Nación entra, en definitiva, en defensa de su propia identidad".

Tal como lo hemos manifestado en la última sesión, el plano legislativo no puede agotar lo que corresponde a los planos de ejecución y judicial. El ejemplo más claro lo tenemos en lo que ocurrió ayer cuando se dispone la intervención del Servicio Penitenciario Federal, a pesar de que no se trata de una intervención. Esto hubiera sido lo deseable, tal como lo propuso hace largo tiempo el señor presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Es decir, que se hubiera intervenido y que se efectuara un proceso de selección que respetara la línea de premios y castigos. Porque en toda depuración masiva, el riesgo que se corre es quebrar la línea de comando, ya que quedan identificados en igual situación quienes efectivamente —con un análisis individual del caso— pueden haber ganado un prestigio en la conducción de la fuerza respectiva. Eso no se puede hacer cuando se produce un descabezamiento masivo y sin selección. Esto ya se vivió —particularmente en las provincias—, y todos sabemos la reacción con el paso del tiempo.

Entonces, creo que es cierto que tenemos una inflación de penas. Lamentablemente, los ejemplos que trajo el senador Yoma no son los más felices, pues citó los artículos 91 y 166 del Código Penal que tienen, cuanto menos, 40 años de vigencia. El artículo 91 —lesiones gravísimas— es original del código, y ahí están los tres a diez años. Y el artículo 166 fue modificado por la ley 20.642 —cuando el justicialismo estaba en el poder en 1974—, y ratificado por la ley 23.077 apenas recuperada la democracia en 1983. En dicho artículo se establecen los cinco a quince años por el uso especial de las armas, como el ejemplo del cuchillo que dio el señor senador Yoma.

Es cierto que hace falta alguna homogeneidad. Sobran los ejemplos en los cuales la infla-

ción de penas nos va acercando a la Ley del Talión, pero llega un momento en que no hay sanción suficiente, la sociedad vuelve a la selva o al régimen primitivo del garrote, y la respuesta frente a cualquier falta consiste virtualmente en la mutilación o la supresión de la vida. Ese no es el deseo de la Cámara. Pero está claro que la respuesta que da el Poder Legislativo va en asociación a un fenómeno de creciente inseguridad y de distorsión de los mecanismos habituales de la delincuencia. Y ante esta situación, como dijimos en la sesión anterior, a veces uno trata de usar más manos que las que tiene el Legislativo para tratar de tapar agujeros que están en el sistema judicial o en el de ejecución.

Por eso considero que esta iniciativa tiene que ser respaldada sobre la base de la acertada observación que ha hecho la senadora Escudero, que la coloca en sintonía con la normativa que ya hemos sancionado en su oportunidad. Ahora, lo único que se propone es un reequilibrio de las penas a través de la sanción de quien usa indebidamente las armas que la Nación le ha conferido.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Senado de la Nación, senador José L. Gioja.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra la señora senadora Conti.

Sra. Conti. — Señor presidente: consentí aumentar las penas ante hechos de violencia en el deporte ante un requerimiento del secretario de Turismo y Deporte del gobierno nacional, como forma de ayudar a la descongestión de esa conflictiva popular insoportable. Pero no forma parte de mi doctrina ni de mi dogmática aumentar penas y seguir rompiendo la sistemática del Código Penal.

Yo no voté el agravante del artículo 80 del Código Penal para cuando en el hecho doloso y homicida la víctima sea un policía. En consecuencia, no voy a votar ahora el agravante que se pretende. Máxime cuando con este mismo Código Penal y sin aumento de penas, hace años que agentes de las fuerzas policiales, de las fuerzas penitenciarias o de las fuerzas de seguridad han formado parte de bandas delictivas, pero esos hechos no salían a la luz. Hoy dentro de las mismas fuerzas, la sociedad, la justicia y la dirigencia política se han puesto de consuno, de acuerdo, para que prevalezcan la idoneidad,

la honestidad y el bienestar del pueblo, y que se erradique el fenómeno delictual en cabeza de funcionarios públicos. Repito, aumentando las penas no se ha logrado que hoy salgan a la luz hechos aberrantes como los que todos conocemos, sino que es necesario que a través de un consenso popular y funcional se ponga de relieve que el país no va a ninguna parte si no empezamos a cambiar las políticas de gestión ejecutiva, judicial, legislativa, etcétera.

Tampoco voy a votar el aumento de pena porque este gobierno nacional, generalmente por medio del secretario de Seguridad, el doctor Quantín, que no es un abolicionista ni un garantista —no se ha enrolado nunca en esa dogmática—, está diciendo que no es el aumento de pena el instrumento para erradicar la violencia delictiva. Tampoco voy a votar el proyecto porque el presidente de la Nación por decreto conformó una comisión especial coordinada por el doctor Arslanián e integrada por senadores de este cuerpo para analizar el Código Penal.

Si no se revé la posición por la cual hoy se pretende votar este proyecto, más allá de que la Cámara de Diputados no lo trate, voy a votar negativamente este proyecto porque quiero ser coherente.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Yoma. — Pido una interrupción.

Sr. Pichetto. — Cómo no.

Sr. Presidente (Gioja). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: el senador Baglini dijo que éstos son artículos que llevan décadas en el Código Penal argentino. Esto es cierto en el caso de las lesiones gravísimas, no así en el robo con armas, figura que ha sido modificada por este Congreso. Planteo el restablecimiento de un equilibrio en el sistema punitivo penal, que ha sido absolutamente alterado. Cualquiera que revise con alguna objetividad las últimas legislaciones de este Congreso en materia penal, no puede negar que el sistema punitivo penal ha sido absolutamente alterado. Hay penas graves para delitos menores y penas muy leves para delitos graves. En el articulado del Código Penal se pueden encontrar sobrados ejemplos.

No quería extenderme mucho pero la acotación del senador Baglini amerita que abunde en

argumentos. Hay un trabajo muy enjundioso realizado en 1999 por el Centro de Estudios Legales y Sociales respecto a la violencia policial en la Argentina y cómo encarar ese problema. Uno podría pensar que el CELS, por su ubicación ideológica, propicia la pena de muerte para los policías que abusen, pero no es así. Por el contrario; señala que hay medidas mucho más efectivas para solucionar el problema de la violencia y abuso policial en la Argentina, como hicieron otros países, por ejemplo, el control del uso de armas de fuego cuando el policía no está en ejercicio de sus funciones. En la Argentina rige una reglamentación en ese sentido, pero nunca se puso en práctica.

Fíjese, señor presidente, que a través de estadísticas de la propia Policía Federal se ha probado que el 12 por ciento de las muertes de civiles fueron consecuencia de disparos efectuados por policías que no estaban en servicio en el momento del hecho. Es decir, por el mal uso o uso incorrecto del arma reglamentaria.

Hay países que han avanzado en el control del trabajo de la policía ya sea durante el período de servicio o fuera de él. Se sostiene que facultar a la policía para que actúe cuando no está en servicio pone en riesgo la propia integridad física del agente y ocasiona un incitación al abuso policial. Todo esto no se soluciona agravando las penas, sino con políticas correctas dirigidas a la prevención.

Algunos países desarrollados registran grados de delitos más alto que el nuestro. En ellos también el impacto social es más grave y la sensación de inseguridad es mucho más seria. Esto se desprende de las estadísticas que figuran en el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales que empecé a citar. Por ejemplo, en aquellos países en los que se restringe la utilización de armas de fuego por parte de los policías cuando no están en servicio —denominado política de uso y control de armas de fuego— han caído los índices de abuso y violencia policial.

Si tomamos las cifras de Buenos Aires y las comparamos con las de países como Gran Bretaña y Australia, que son altamente desarrollados, veremos que las cifras de muertos por enfrentamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran absolutamente alejadas con respecto a los organismos de seguridad pública que han desarrollado políticas de con-

trol claras en el uso de la fuerza. Entre 1995 y 1997 por balas policiales o abuso policial sólo hubo 12 civiles muertos por año, mientras que en igual período los policías muertos en ejercicio sumaron nueve. A su vez en Inglaterra y Gales, que tienen poblaciones que superan la población argentina, sólo hubo cinco víctimas civiles en enfrentamiento con la policía y ningún funcionario policial muerto en acto de servicio. En cambio, durante 2001 en Buenos Aires hubo 125 civiles muertos —mientras que en Inglaterra durante el mismo período fueron cinco— y 51 policías muertos. También quisiera señalar que hubo otras políticas de control y reglamentación que tendieron a la prevención.

Nuestro problema es la absoluta incoherencia entre el discurso de la política ante un hecho delictivo y la respuesta del legislador. No voy a abrir un juicio de valor sobre las personas que a continuación voy a mencionar y por quienes siento el más alto de los respetos y afecto personal. Cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires el doctor Ruckauf, él llevaba adelante el discurso de la mano dura; el que dice: “Vayan y hagan”, y que, muchas veces, impulsa el abuso y violencia policial. Decía el doctor Ruckauf que “hay que meterle bala a los ladrones, combatirlos sin piedad; cuando un asesino se está tiroteando con un policía siempre estará respaldando al efectivo para que quede en claro que la bala que mató al delincuente es la bala de la sociedad que está harta de que desalmados maten al mansalva a gente inocente”. Este es, digamos, el discurso inflamado.

En los hechos todos sentimos eso mismo: la sanción ejemplar al que delinque. Pero si por un lado se dice que se tiene piedra libre para matar y, por el otro, si se mata se agrava la pena, entonces, ¿en qué quedamos?

Reitero: debemos tener un marco en el cual la sociedad perciba de este Parlamento y del sistema político cuál es el horizonte, qué es lo que buscamos con la legislación, a dónde apunta, cuáles son los valores que defendemos y qué tiene que esperar de nosotros. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un discurso absolutamente incoherente con las acciones y la sociedad va a reaccionar de acuerdo al hecho que figura en la tapa del diario: cuando muera un civil en un enfrentamiento de la fuerza policial se va a pedir la cabeza de todos los policías

y cuando muera un policía en un enfrentamiento con delinquentes inmediatamente se va a habilitar a la policía para que haga cualquier tipo de actos, inclusive aquellos que están fuera de la ley.

No podemos seguir manejandonos de manera espasmódica, de acuerdo con la tapa del diario del día. A eso me refiero cuando hablo del absoluto desequilibrio del sistema punitivo argentino que estamos provocando nosotros mismos con nuestra legislación.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto, es el último orador.

Sra. Halak. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pichetto. — Señor presidente: me ha pedido una interrupción la señora senadora Halak. Se la concedo.

Sr. Presidente (Gioja). — Tenga en cuenta que se está usando parte de su tiempo, señor senador.

Sr. Pichetto. — Lo sé, señor presidente.

Sr. Presidente (Gioja). — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Halak.

Sra. Halak. — Muchísimas gracias, senador Pichetto.

Señor presidente: voy a ser muy breve para señalar algunas aclaraciones a mi querido compañero de bancada.

Quiero aclarar que este proyecto no es ni mediático ni espasmódico: es un reclamo de todos los habitantes de la Argentina que sienten cada vez más que la violencia nos está sobrepasando; es un reclamo a los legisladores para que actuemos de acuerdo con lo que la sociedad está esperando de nosotros.

La sociedad pide que elaboremos y dictemos leyes que le permitan vivir en democracia y con seguridad, que protejamos su vida, su salud, su integridad y su propiedad. ¿Cómo es posible que a quien la sociedad y el Estado le han conferido el poder para evitar el delito cometa hechos contrarios a derecho? Es ahí en donde nosotros debemos apuntar. Tenemos que escuchar a la gente.

Sé que es necesario una reforma estructural. Lo sé, pero eso no implica que este proyecto sea ni oportunista ni mediático, ni espasmódico. Hace mucho tiempo que vemos estos delitos dentro de las fuerzas de seguridad. Y aquí quiero dejar bien a salvo a aquellos agentes que cum-

plen con su deber, muchas veces arriesgando su vida y entregándola en defensa del deber asumido.

Yo quiero resguardar a las instituciones y a los agentes de seguridad. Estoy convencida de que si se aplica correctamente este proyecto será disuasivo para la comisión de delitos, pero además será un claro mensaje para toda la sociedad respecto de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. Asimismo, será un mensaje de respeto para la propia fuerza y de revalorización de todos aquellos agentes que trabajan de manera honrada y decente.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Voy a tratar de ser breve.

Ante todo, pido que se convoque a los señores senadores al recinto para que podamos votar.

Sr. Presidente (Gioja). – El timbre está sonando, señor senador.

Sr. Pichetto. – En primer lugar, no creo en las reformas estructurales. Además, me pregunto quién va a hacer esta tarea. ¿Los académicos?, ¿los juristas?, ¿un grupo de iluminados en algún laboratorio? Yo reivindico para el Parlamento argentino la tarea de legislar en una materia ultrasensible, respecto de la cual el Congreso está en deuda.

Por otra parte, no es cierto que todos los días estemos sancionando normas para aumentar las penas. En los últimos cinco años no hemos tratado ni hemos podido aprobar nada. Recién este año –a propósito de lo cual reivindico el rol de este Senado– hemos “tomado el toro por las astas” y hemos abordado algunas problemáticas delictivas de alta gravedad, como el tratamiento integral de una norma sobre una figura que califiqué de dramática en la Argentina: me refiero a los secuestros extorsivos y exprés. En ese sentido, no hemos tratado solamente el aumento de las penas, sino que hemos hecho una reforma procesal. A tal efecto, hemos dado a los fiscales el rol que deben tener en el país; o sea, un rol central en materia de investigación, avanzando un paso hacia el sistema acusatorio que en algún momento deberá tener la Argentina.

También hemos tratado temas que hacen al rol de las fuerzas de seguridad, como es el caso

de este proyecto de la señora senadora Halak. Al respecto, les digo sinceramente que a mí no me gusta entrar en este tipo de figuras para aumentar las penas para los funcionarios de la policía y de las fuerzas de seguridad. Pero indudablemente hay datos que surgen en nuestra sociedad que no podemos deslindar y que en los últimos tiempos se han agravado con la participación de miembros policiales en delitos altamente complejos.

En cuanto a este tema también hay que asumir las responsabilidades. No es suficiente solamente una ley. En esto coincido con algunas apreciaciones de distintos legisladores: no alcanza solamente con la ley que, por otra parte, también figura en muchas legislaciones comparadas y que consiste en calificar de manera distintiva a la figura delictiva cuando la comete un funcionario policial que debe velar por la seguridad de los ciudadanos. Cabe señalar que este no es un hecho extraordinario de la legislación argentina, sino que en general la figura del agravante la encontramos en casi todos los países cuando el delito es cometido por un funcionario policial.

Aquí hay que asumir con autocrítica los procesos de deterioro que han ocurrido en las policías provinciales y también en el ámbito nacional, con salarios miserables. Los Estados provinciales, inmersos en proceso de ajuste, han ido deteriorando y empobreciendo el rol de la seguridad pública, lo que muchas veces obliga a los agentes de policía a vivir en barrios en contacto permanente con el delito, o sea, en barrios altamente marginales. A esto se suma, en los últimos años, la inexistencia de planes de vivienda y de promoción social, lo que también abarca a la Policía Federal.

En la actualidad, el combate contra el delito en la Argentina es uno de los grandes desafíos de la democracia. El país tiene problemas económicos, pero también un grave problema de seguridad ciudadana. Por ello, con todo respeto por las comparaciones que hizo mi compañero de bancada, el senador Yoma, señalo que no podemos comparar a la Argentina con países de alto nivel de desarrollo como son Australia e Inglaterra, que tienen altos niveles de ingresos y policías que cobran sueldos que rondan los tres mil euros o dólares, como ocurre con los policías australianos, norteamericanos e ingle-

ses. Acá, el salario policial es malo, muy pobre. Este tema lo tenemos que debatir, porque en un país en el que todos se empobrecen, si queremos tener una seguridad acorde, debemos trabajar para lograr el mejoramiento de los salarios en todos los niveles de la seguridad pública.

También es fundamental promover la capacitación de nuestros policías. Este es uno de los temas más graves en los Estados provinciales, es decir, el deterioro de la capacitación y de la forma de selección de los funcionarios policiales.

Entonces, no tenemos que compararnos con los países que se han mencionado anteriormente, sino con la situación de Colombia en la década del '80.

En ese sentido, vuelvo a recordar que existe un libro muy interesante escrito en esa década, denominado *El día que se empezó a pudrir Colombia*. La obra trata, fundamentalmente, del rol de la plata del narcotráfico metida dentro de las organizaciones policiales.

Efectivamente, la situación más endeble de Colombia con relación a la policía se produjo a principios de la década del '80, con motivo de la infiltración de la plata del narcotráfico, la cual empezó a penetrar en primer lugar en las instituciones policiales como consecuencia de los bajos salarios, por el bajo nivel de capacitación y por problemas de tipo cultural que existían en la policía colombiana.

O sea que el desafío de la Argentina consiste en abordar la problemática de la seguridad pública, porque la situación es dramática. Lo vemos todos los días en las pantallas de la televisión. Y si tenemos que aumentar las penas con respecto a algunos delitos, lo deberemos hacer. Es nuestra tarea. Los otros poderes del Estado tienen otras obligaciones. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene que mejorar el funcionamiento de la policía, a la cual debe capacitar, brindar uniformes, balas, una mejor remuneración y una doctrina que evite su contaminación y que esté comprometida con las bandas que operan los desarmaderos, el narcotráfico y la prostitución. Esto es lo que debe hacer el Poder Ejecutivo. Y el Parlamento debe sancionar leyes. Esa es nuestra tarea. Porque si no estamos aquí para eso y para reformar los códigos, deleguemos esa tarea en los académicos y que la realicen en otro lado, aunque no se quién la va a llevar a cabo.

Señor presidente: creo que el Congreso y el Senado han inaugurado este año una nueva forma de trabajar. En ese sentido, quiero reivindicar el rol del presidente de la comisión, el señor senador Agúndez, la tarea de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la actuación que ha venido llevando a cabo mi colega, la señora senadora Escudero. Considero que estamos abordando temas de gran preocupación y gravedad.

Además, también vamos a tratar un proyecto que establece un incremento en las penas para los mayores que utilicen a menores de edad para cometer delitos.

A su vez, existe un tema pendiente —creo que es la cuestión de fondo—: la situación de los menores que cometen delitos sin que ningún mayor los mande. Generalmente, son delitos altamente graves. En los programas a los que me invitan para referirme a este tema siempre digo que prefiero que me robe el “gordo Valor” y no un pibe de 15 años con una arma en la mano, porque en este último caso mi vida correrá un gran peligro. Esto lo vemos todos los días. Por lo tanto, vamos a tener que abordar esta cuestión sin prejuicios. ¿Qué hacemos con los delitos cometidos por menores que tienen tanta violencia? No estamos hablando del hurto de una bicicleta, ya que en ese caso es claro que hay que ver cómo se trata al menor para que no siga avanzando en la escala delictiva. Me estoy refiriendo al robo a mano armada seguido de muerte cometido por muchos menores. ¿Qué hacemos con ellos?

Seguramente, cuando abordemos este tema aparecerán los discursos que harán referencia a la Convención de los Derechos del Niño. Son discursos comprensibles. Pero respecto del menor que roba y que mata, para el cual la vida no vale nada; respecto del menor que se mete en una casa y juega con la vida de una familia y la pone en riesgo, este país y esta sociedad tendrán que preguntarse dónde debe entrar a jugar el rol del Estado y qué se debe hacer con ese menor cuando se convierte en un sujeto altamente peligroso. ¿Se lo debe colocar en un establecimiento de seguridad para su resocialización y recuperación? ¿Habría que invertir en cárceles para esos menores? En fin, es un tema realmente muy amplio.

Insisto: reivindico el rol que está desempeñando el Senado. Creo que tenemos que seguir profundizando este debate.

Hoy el tema de la seguridad es sensible y central para la sociedad y está agravado por la crisis económica y social, por la falta de rumbo y de motivación y por el fenómeno de la droga, que es un delito organizado. ¡La droga está! La Argentina ya no es sólo un país de tránsito sino un país de consumo.

Hace unos días leí un muy buen artículo publicado en un importante diario del país, donde se mencionaba que en las villas de la Argentina se está produciendo un fenómeno de "favelización" igual al de Río de Janeiro.

Entonces, si no queremos ver el asunto, no lo veamos; si no queremos tratar estos temas, no los tratemos; mirémoslos a la noche en la televisión. Ahora bien, creo que nuestra responsabilidad es abordar esta cuestión, analizar a fondo los temas y legislar, porque ésa es nuestra tarea.

En algunos momentos habrá que modificar el ámbito procesal, en otros ajustar las penas o considerar institutos preventivos; pero, sin duda, nuestra obligación es legislar.

En consecuencia, votaremos positivamente esta norma. Digo esto con todo el respeto que me merece la opinión del senador Yoma, que es una posición consecuente. No lo discuto desde lo personal sino respetando esta postura, porque el debate acerca de la política criminal a adoptar en la Argentina ya está abierto.

Por lo tanto, reitero, vamos a apoyar la propuesta y el dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.

Sr. Presidente (Gioja). – Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – No, señor presidente. No es una aclaración; me corresponde cerrar el debate.

Sr. Presidente (Gioja). – Me parece muy bien. *(Risas.)*

Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Estamos mal, estamos mal.

Sr. Presidente (Gioja). – Estamos bien. *(Risas.)*

Sr. Baglini. – Como últimamente los temas se tratan en el bloque...

Sr. Agúndez. – Claro, yo quisiera saber en qué bloque se tratan.

Señor presidente: quiero agregar dos o tres cosas.

En primer lugar, el senador Yoma ha hablado de la incoherencia en el aumento de penas.

Sin embargo, a través de este proyecto –que no es de mi autoría ni de ningún senador radical sino de la señora senadora Halak y del ex señor senador Maqueda, que creo que algo de derecho debe saber– lo que hemos intentado es alcanzar un equilibrio.

Por otra parte, quería mencionar que antes de que comenzara la sesión se realizó una conferencia de prensa con la autora del proyecto y el ministro de Justicia, Béliz, acerca de este tema, quien le agradeció a la señora senadora lo que este cuerpo se dispone a sancionar.

Ahora bien, yo quisiera saber de qué juegan una parte y la otra del justicialismo, porque nosotros somos la oposición. A mí la Unión Cívica Radical y, en este caso mi bloque, me han instruido para que como presidente de la comisión colaborar en todos los temas que son cuestión de Estado; y creo que la seguridad es una cuestión de Estado.

En consecuencia, voy a reiterar por quinta vez consecutiva que la orientación de la política criminal no la tenemos nosotros sino el Poder Ejecutivo nacional. Nosotros contamos con un sólo instrumento: la sanción de una ley, como bien lo mencionó el señor senador Pichetto.

El problema del armamento, de la elección y selección de la Policía lo hace el Poder Ejecutivo; nosotros en este caso sólo colaboramos.

Sin embargo, pareciera que este proyecto –según lo manifestado por algunos integrantes de la bancada oficialista–, lo hemos elaborado los radicales, cuando simplemente somos integrantes de la comisión a los cuales nuestro bloque nos dice que hay que trabajar para esto.

Por lo tanto, quiero que los senadores oficialistas se pongan de acuerdo, porque la próxima vez lo que vamos a hacer es esperar a que decida el bloque mayoritario qué es lo que quiere hacer con las leyes, obviamente en las reuniones de bloques, no sé si la oficial o cuál... *(Risas.)* Esto es lo que tenemos que hacer.

Discúlpeme, señor presidente, pero no podía dejar de hacer este comentario. Debo hacerlo, de lo contrario pareciera que los radicales estamos siendo más papistas que el Papa y yo no voy justamente todos los días a la Casa Rosada. Entonces, quisiera que los que van a la Casa

Rosada también hablen con los ministros de estos temas. Es decir, que critiquen acá pero también allá, porque allá dicen que "sí" y acá que "no".

Sr. Presidente (Gioja). – Bueno, muy bien...

Sr. Agúndez. – Todavía no terminé, presidente.

Sr. Presidente (Gioja). – Ocurre que el señor senador Yoma le solicita una interrupción...

Sr. Agúndez. – No voy a conceder ninguna interrupción, porque es hora de que cuando se haga una oposición parcial se digan los motivos por los cuales se la hace, ya que, a veces, se juega a las escondidas con las oposiciones. Que se diga por qué se hace la disidencia parcial, para qué y cómo, porque aquí no se lo hace.

Cuando el señor senador Yoma empiece a mencionar las disidencias y sus motivos le voy a contestar, mientras tanto no lo haré.

Por otra parte, también se comentó que así como el ex presidente Duhalde llevó adelante la creación de una comisión antisequestro –con respecto a la cual hemos aprobado todas las leyes al respecto– el presidente Kirchner –atento a ese trabajo– estableció la creación de una comisión para la reforma de los temas más sensibles de la seguridad en este momento.

Acá se dijo que no se va a aprobar eso. Nosotros tenemos que pedir permiso –porque dice: "Con permiso de la jurisdicción a que pertenecemos"–. Es el caso del presidente de la bancada oficialista, Pichetto, y quien les habla.

Si en realidad no quieren que participemos, voten y digan: "No, no queremos colaborar". Pero estamos trabajando y tenemos que pedir permiso al Senado, de acuerdo con la Constitución Nacional, para seguir integrando esa comisión.

Algunos dicen que no vamos a trabajar. Entonces, que el presidente de la bancada justicialista le diga al gobierno que no vamos a trabajar. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando. Yo pido que la coherencia, señor presidente, la empiece a tener el bloque Justicialista. Nosotros vamos a seguir colaborando.

Con respecto al tema que nos compete, vamos a aceptar la reformulación –tiene toda la razón la senadora Escudero– en base a lo que dicen y dictaminan las leyes de seguri-

dad. Entonces, vamos a aceptar esa modificación. Somos Cámara iniciadora y lo podemos hacer.

En segundo lugar, cuando se leen los artículos 2º y 3º, vemos que en este último se dice: "En los casos enunciados en el presente capítulo, la pena se aumentará en un tercio,...". Tiene que agregarse: "...en su mínimo y en su máximo,...". Si no, puede interpretarse que es exclusivamente sobre su máximo. Entonces –insisto– debe decirse "...en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad pública". Por lo tanto, la modificación de la senadora Escudero la tenemos que aceptar en los tres artículos, más el agregado que hemos mencionado, señor presidente.

Eso es todo, y espero que no tengamos estos inconvenientes en otras oportunidades.

Sr. Yoma. – Pido la palabra para dar el sentido de mi disidencia.

Sr. Presidente (Gioja). – Pero ya habló, senador Yoma...

Sr. Yoma. – Señor presidente: trate de ser tolerante. Quiero exponer el sentido de la disidencia que reclamó el presidente de la comisión.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra, entonces, el senador Yoma.

Sr. Yoma. – Como ya lo dije al comienzo, señor presidente, voy a votar el proyecto porque tiene relación con el espíritu que llevó a la senadora Halak a presentarlo, que es establecer una comparación entre lo que sancionamos antes –el agravamiento de las penas para aquellos delitos en los cuales se es víctima de la policía–, y lo que estamos tratando ahora. Por eso apoyo el proyecto.

Mi disidencia tiene que ver con que no estoy de acuerdo con seguir desequilibrando el sistema de penas del Código Penal.

Creo que esto aclara el sentido de mi firma.

A lo que no voy a poder responder seguramente es a lo siguiente. Yo pensaba invitar al senador Agúndez a La Rioja. Pero como veo que está muy confundido respecto de cómo funciona el peronismo, si lo llevo a llevar a La Rioja, después va a necesitar una manifestación de psicólogos. Por eso prefiero no llevarlo a La Rioja, para que no se confunda más.

Sr. Presidente (Gioja). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración en particular el artículo 1° con la modificación propuesta por la señora senadora Escudero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 2°.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – En los artículos 2° y 3°, además de la modificación introducida por la senadora Escudero, tiene que decir: "...se aumentará en un tercio, en su mínimo y en su máximo..."

Sr. Presidente (Gioja). – Efectivamente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2° con la modificación propuesta.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncia el artículo 3°.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración

Se va a votar con las modificaciones propuestas.

–La votación resulta afirmativa.

–El artículo 4° es de forma.

Sr. Presidente (Gioja). – Queda sancionado el proyecto de ley¹. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

58

RENUNCIA DE LA SEÑORA SENADORA HALAK

Sr. Presidente (Gioja). – Ha entrado una nota de la senadora Beatriz S. Halak.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Estrada). – (Lee:) "Al señor presidente del Honorable Senado, señor Daniel O. Scioli. Me dirijo a usted, como presidente del cuerpo, a efectos de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de senadora nacional por la provincia de Córdoba. Motiva la misma el haber sido elegida por el Partido Justicialista de mi provincia como candidata a viceintendente por la ciudad de Córdoba. Sa-

biendo las exigencias del desempeño de ambas funciones, me siento obligada a tomar esta decisión.

"Sin otro particular, lo saludo atentamente. Beatriz S. Halak, senadora nacional".

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración.

Tiene la palabra la señora senadora Halak.

Sra. Halak. – Señor presidente: esperé hasta hoy para presentar mi renuncia porque quería defender el proyecto que acabamos de sancionar, que estábamos esperando tratarlo desde el año pasado.

En primer lugar, quiero despedirme agradeciendo a las autoridades de esta Cámara, a todos los compañeros y compañeras senadores y senadoras, y a todos los trabajadores de esta casa que siempre han tenido una actitud amable, de servicio, de colaboración para quienes, viniendo del interior, la tarea no nos resultó nada fácil. Vivimos momentos muy duros.

Para mí éste es un momento de mucha tristeza. A quien dice que no se sienten las despedidas; le diría que se despidió para ver lo que se siente.

Simplemente quiero decirles que los momentos tan duros que vivimos en esta casa me dejaron una gran enseñanza. A pesar de todos los embates y las críticas que con angustia vivimos todos los senadores y todos los trabajadores de esta casa, nos queda la satisfacción de que con nuestro trabajo, muchas veces muy silencioso, muy comprometido, en consonancia con el Ejecutivo, hemos sostenido un país que se desintegraba. En efecto, con mucha responsabilidad sostuvimos el país y evitamos que hubiera una guerra y una matanza entre hermanos. Hoy lo puedo decir con satisfacción. Tal vez quienes viven en la Capital lo hayan vivido de otra manera, pero para quienes somos del interior la experiencia fue muy violenta y, a la vez, muy enriquecedora. Aprendí mucho, adquirí mucha experiencia. Aprendí mucho de mis queridas compañeras y de mis queridos compañeros, de los compañeros de otras bancadas. Aun en el disenso siempre hubo respeto, compañerismo, comprensión y trabajo responsable.

Me llevo el mejor de los recuerdos y los llevo en mi corazón. Voy a trabajar con todo mi empeño –como lo he hecho siempre porque soy una humilde militante– al lado de mi gente, por-

¹ Ver el Apéndice.